JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C. Octubre siete de dos mil veintiuno.

Ref. Acción de tutela No.2021-00914 de ANDRES FELIPE GONZALEZ BERNAL contra CENTRO DE CONCILIACION LA EQUIDAD JURIDICA.

Segunda instancia.

Se procede por el Despacho a decidir sobre la impugnación formulada por la parte accionante contra la decisión del Juzgado 86 Civil Municipal de esta ciudad convertido en 68 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de fecha 14 de septiembre de 2021.

ANTECEDENTES.

El señor ANDRES FELIPE GONZALEZ BERNAL actuando en causa propia, presenta acción de tutela contra EL CENTRO DE CONCILIACION LA EQUIDAD JURIDICA para que se le protejan los derechos fundamentales, al debido proceso y al derecho de defensa.

En síntesis, narra en sus hechos el accionante que: ostenta la calidad de acreedor hipotecario de la señora Esperanza López con garantía real, por valor de \$54.446.180 y por intereses por la suma de \$285.907.025 para un monto total aproximado de \$270.223.606.

Que de esa obligación hay auto de seguir adelante la ejecución, y el proceso se encuentra en el Juzgado Primero de Ejecución de Sentencias, con radicado 2016-141 y con fecha para remate. Dice que estando para remate se recibió del centro de conciliación Juan Pablo II de Tunja un memorial solicitando la suspensión del proceso por haber ingresado la señora Esperanza López a proceso de Insolvencia de persona natural no comerciante.

Dice que dentro del trámite allí adelantado el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja determino la pérdida de competencia del centro de conciliación para seguir adelantando el trámite de insolvencia.

Manifiesta que la señora Esperanza López radica en el centro de conciliación La Equidad Jurídica de Bogotá, nuevo Tutela No. 2021-00914 segunda instancia

tramite de Insolvencia de persona natural no comerciante y dentro de ese nuevo tramite se han presentado irregularidades como es no haberlo incluido a pesar de tener todos sus datos,

Señala que la abogada nombrada por el centro de Conciliación, dra Maria Alejandra Silva, afirmo que se trataba de un proceso y tramite nuevo independiente del que se adelanto en Tunja. Que la misma dra Silva expidió copias de la totalidad del proceso, donde no aparece que se trate de un proceso remitido, y que a la dra Silva le fue informado de su existencia en calidad de acreedor, guardando silencio y sin citarlo.

Dice que al ser un proceso nuevo y los datos del domicilio de la deudora Esperanza Lopez que es la ciudad de Tunja, se propuso la falta de competencia negando dicha petición, argumentando que existe una sentencia del Juez Cuarto Civil Municipal de Tunja donde dice que el domicilio de la señora Esperanza Lopez es la ciudad de Bogotá.

Manifiesta que en la cadena de irregularidades se encuentra la negativa inicial de citarlo, la aceptación de la intervención sin la oportunidad de haber participado en las audiencias iniciales y poder atacar el auto admisorio, que la deudora no relaciona el total de pasivos, que la deudora no presenta la propuesta de pago a los acreedores, que la deudora no relaciona el total de ingresos, que no señalo el total de los dineros que percibe como pensionada, ni los ingresos por arriendos recibidos, que la deudora habla de unos alimentos que da en favor de un nieto, sin incluir el total de los datos exigidos, que no indico el total de acreedores ni acreencias,

Que a la conciliadora se le informo de una denuncia penal formulada en su contra situación que genera una recusación, y se le puso de presente la inhabilidad para seguir conociendo del proceso de insolvencia y se ha negado a resolver dicha petición, y la recusación. Todo lo anterior ha generado que un bien que estaba para remate desde el año 2018, se suspendiera irregularmente con un tramite que a la fecha ha generado un sin número de irregularidades y debe ser levantada de inmediato dicha suspensión, para poder hacer efectiva la garantía real, que recae sobre el inmueble de la avenida carrera 30 No.49 A -34 apartamento 302 de Bogotá, edificio Venecia PH.

Solicita que a través de este mecanismo Tutelar su derecho **al debido proceso y el derecho de la defensa** y en consecuencia se ordene al centro de conciliación dar cumplimiento al procedimiento consagrado en el art.550 del CGP

y se ordene rehacer la petición en debida forma. Se ordene la pérdida de competencia del centro de Conciliación La Equidad y se ordene que remita el proceso para control de legalidad ante el Juez Civil del Circuito de Bogotá, para que se pronuncie sobre la competencia territorial, para que se resuelva la petición de recusación, se resuelva la petición de nulidad del trámite de insolvencia ante la Equidad Jurídica.

Admitida la tutela por el Juzgado 86 Civil Municipal de esta ciudad, convertido en 68 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple con auto de septiembre 3 de 2021 donde se dispuso vincular a ESPERANZA LOPEZ, MARIA ALEJANDRA SILVA, en calidad de conciliadora designada por parte del CENTRO DE CONCILIACION LA EQUIDAD JURIDICA, NANCY PAEZ, JUZGADO 1 DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTA, CENTRO DE CONCILIACION JUAN PABLO II DE TUNJA y JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA. Notificada la parte demandada da respuesta así:

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA

Dice que La señora ESPERANZA LÓPEZ presentó solicitud de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante, ante el Centro de Conciliación Juan Palo II de la Ciudad de Tunja, de la cual se dio apertura por parte de la conciliadora, el día 17 de septiembre de 2019. Dándose inicio a la audiencia el 7 de noviembre de 2019, en la cual luego de realizar la presentación de los asistentes y antes de iniciar la etapa de negociación, se presentó una controversia, sin que la misma hubiese podido ser conciliada en la referida audiencia.

Que Transcurrido el término de traslado para presentar las objeciones por escrito, se radicó dentro del término legal únicamente una controversia por el apoderado de los acreedores NANCY ESTELA PÁEZ CHACÓN y ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ BERNAL, mientras que la formulada por NATALIA IVETTE MORENO DUARTE en su calidad de administradora del EDIFICIO VENECIA PROPIEDAD HORIZONTAL, fue radicada fuera del término establecido en el artículo 552 del C.G.P.

Señala que Se corrió traslado de la controversia a los restantes acreedores por el término de 5 días, para que se pronunciaran sobre las mismas y aportaran las pruebas a que hubiera lugar, según se anunció por la conciliadora en audiencia del 07 de noviembre de 2019. Que La apoderada de los solicitantes recorrió el traslado de la controversia presentada mediante memorial radicado en el Centro de Conciliación Juan Palo II de la Ciudad de Tunja, dentro del término concedido, el Tutela No. 2021-00914 segunda instancia

día 18 de noviembre de 2019. 6. Dice que La conciliadora designada por el centro de conciliación, anunció en la audiencia del 07 de noviembre de 2019, que una vez vencido los términos para presentar las objeciones con su respectivo traslado se enviaría el expediente al Juzgado Civil Municipal de Tunja - Reparto, para que decidiera sobre la objeción presentadas, el cual fue enviado mediante oficio obrante a folio 01, del expediente.

Refiere que Por reparto correspondió el conocimiento de las presentes diligencias a ese despacho. Y Por auto del 1º de julio de 2020, el Despacho decidió las objeciones resolviendo “Definir la controversia planteada por la señora NANCY ESTELA PÁEZ CHACÓN y el señor ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ BERNAL, en el sentido de indicar que el domicilio de la deudora ESPERANZA LÓPEZ está en la ciudad de Bogotá, por lo que el Centro de Conciliación Juan Palo II de la Ciudad de Tunja, carece de competencia territorial para adelantar el procedimiento de negociación de deudas de la citada señora, según los fundamentos expuestos en la parte motiva”.

Manifiesta que El 23 de julio de 2020, el Juzgado devolvió el expediente en físico al Centro de Conciliación Juan Pablo II, dejando las anotaciones correspondientes.

NANCY STELLA PAEZ CHACON

A través de apoderado da respuesta como acreedora indicando que Esperanza Lopez inicia un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante ante el centro de conciliación de la ciudad de Tunja, el cual curso ante el centro de conciliación JUAN PABLO II. Que En dicho tramite fungió como apoderado de los señores NANCY PAEZ y FELIPE GONZALEZ acreedores hipotecarios.

Señala que Dentro de los hechos y soportes allegados por la señora ESPERANZA LOPEZ para el tramite se allegaron en la discriminación de los gastos de la deudora entre otros: a) Pago servicios públicos del apartamento de Bogotá, donde ella vivía. b) Igualmente, dentro del trámite de la referencia en el escrito radicado ante el centro de Conciliación Juan Pablo II la señora ESPERANZA LOPEZ allega al mismo los recibos de servicios públicos del lugar de su domicilio y olvida que ha dicho en el mismo tramite que el mismo es la ciudad de Tunja en la Calle 9 No. 6 – 29 y allega la copia de servicios públicos de la Cra 30 No. 49 A – 34 apto 302 de Bogotá, lo que demuestra que su real Domicilio es la ciudad de Bogotá.

Dice que Así mismo cuando la presenta por medio de Contador Público certificado de ingresos y gastos manifiesta lo siguiente: • Arriendo apartamento 302 la suma de \$ 600.000. • Luz Codensa \$ 63.750. • Gas Natural \$ 32.700. • Recibo de E.A.A.B (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por \$ 130.393. • Internet parabólica y teléfono. \$ 350.000. d) Para probar lo anterior allega recibos de los anteriores gastos y todos y cada uno de ellos corresponde al inmueble de la ciudad de Bogotá Cra 30 No. 49 A – 34 apto 302 de Bogotá de los meses de abril, julio, agosto y enero de 2019, con lo que se demuestra que si vive y su domicilio real es la ciudad de Bogotá y no la ciudad de Tunja como lo manifestó en su escrito radicado ante el Centro de conciliación. Ver folios 191, 192, 193, 194. 4.

El centro de Conciliación Juan Pablo II, guardo silencio frene al fallo del Juzgado 4 Civil Municipal de Tunja, no quiso dar información al suscrito del cumplimiento el fallo, pese a enviar comunicación vía correo electrónico, también guardo silencio y no dio información cuando asistió directamente a las instalaciones del Centro de Conciliación, y se negaron a recibir correo certificado remitido vía SERVIENTREGA, el cual fue devuelto con NOTA SE NIEGAN A RECIBIR.

Señala que después de un año la señora NANCY PAEZ recibe una llamada donde le informan que es del centro de conciliación LA EQUIDAD JURIDICA que es para informarle de una audiencia que tendría al día siguiente para proceso de insolvencia de ESPERANZA LOPEZ radicado en Bogotá,

Dice que la deudora no suministro los datos completos de sus clientes, que le dio poder la señora NANCY PAEZ, sin poder de parte de FELIPE GONZALEZ a quien dentro del expediente no había sido citado, ni avisado ni por la deudora, ni por el centro de conciliación.

Manifiesta que Solicito suspensión de la audiencia y copias de todo el expediente, se fija nueva fecha y a la fecha de la audiencia la señora conciliadora ni el centro de conciliación habían permitido copia del expediente. Que Así mismo la señora CONCILIADORA pretendía iniciar unas diligencias sin tener ella el expediente en su poder, y sin permitir acceso al mismo, así sucede por dos o tres fechas mas hasta que por fin sin la copia del expediente sustento oposición, la cual es resuelta de forma negativa por la conciliadora aduciendo las actuaciones surtidas en el Centro de Conciliación de Tunja y citando el fallo del Juez Cuarto Civil municipal de Tunja, sin tan siquiera estar el mismo en el expediente cursante ante el centro de conciliación de Bogotá.

Anota que Cuando le entregan copia del expediente verifica que es un proceso radicado nuevo con unos datos diferentes a los radicados en Tunja por lo que las circunstancias de tiempo, modo y lugar han variado de la solicitud radicada en Tunja a la solicitud radicada en Bogotá, es decir el fallo sobre el cual argumenta su decisión la señora CONCILIADORA no es oponible al caso concreto de la ciudad de Bogotá, ya que han variado las circunstancias, tanto que la señora ESPERANZA LOPEZ y sus abogados omitieron dar los datos del suscrito, los de la señora NANCY PAEZ y mas aun no incluyeron al señor FELIPE GONZALEZ dentro del tramite que cursa en Bogotá.

Dice que los hechos de la demanda son diferentes a la iniciada en Tunja. Que a la conciliadora le puso de presente que faltaba ser citado y convocado un acreedor y ella y la deudora negaron hasta último momento citar y convocar a FELIPE GONZALEZ para que hiciera valer sus derechos dentro de ese proceso. Y sin la citación ni participación de el, se adelantaron audiencias. Señala que se propusieron objeciones a la graduación de los créditos, de los cuales no saben nada por parte del centro de conciliación.

Solicita se declare la perdida de competencia.

. La apoderada del Edificio Venecia P.H. y quien fuera apoderada judicial del accionante para el momento de los hechos, mencionó en su escrito de contestación que: Coadyuva las pretensiones y solicita la protección y amparo constitucional al debido proceso . Que ESPERANZA LÓPEZ no incluyó la acreencia de ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ BERNAL y que con la omisión de informar en la solicitud de trámite de negociación todos los pasivos que se encuentran a su cargo, situación que al ser advertida en la audiencia instalada, debió ser atendida de manera preferente por la Operadora de Insolvencia, toda vez que con su actuar facilita la insolvencia fraudulenta en perjuicio no sólo del señor GONZÁLEZ BERNAL, sino también de los demás acreedores. Señala que han transcurrido a la fecha nueve (9) meses sin que haya ocurrido el cierre de la negociación, lo que claramente contraviene el principio constitucional a la seguridad jurídica .

MARÍA ALEJANDRA SILVA

En calidad de conciliadora designada por parte del CENTRO DE CONCILIACIÓN LA EQUIDAD JURÍDICA, contestó indicando que no es cierto que el Centro de Conciliación Juan Pablo Segundo de la ciudad de Tunja, remitiera el expediente al Centro de Conciliación Equidad Jurídica, acatando la orden del Tutela No. 2021-00914 segunda instancia

Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Tunja, mediante Auto de fecha 1° de julio de 2020, controversia con radicado 2019- 0490-00, dicha providencia “indica que el domicilio de la deudora ESPERANZA LÓPEZ, está en la ciudad de Bogotá, por lo que el Centro de Conciliación Juan Pablo II de la ciudad de Tunja, carece de competencia territorial para adelantar el proceso de negociación de deudas de la citada señora”. Que la directora del Centro de Conciliación Asociación Equidad Jurídica, la designó como Operadora de Insolvencia, cargo que aceptó el 30 de noviembre del año 2020. Que no tiene conocimiento de que se haya tramitado algún incidente o trámite de recusación en los términos de ley.

Que esta acción resulta de plano IMPROCEDENTE, pues el actor en el proceso de negociación de pasivos, se presentó, sustentó la controversia a través de apoderada. Que cuando se determina el traslado del proceso por competencia para otro funcionario, se va en el estado que se encuentra, razón por la cual se mantienen suspendidos los procesos ejecutivos en contra de la deudora, en virtud de las disposiciones establecidas en el Código General del Proceso.

El Juzgado 86 Civil Municipal convertido en 68 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, negó las pretensiones de la tutela mediante sentencia de septiembre 14 de 2021, fallo contra el cual impugno el accionante.

CONSIDERACIONES:

Respecto de la acción ejercida por el perjudicado el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Respecto al derecho del **debido proceso**, la Corte ha dicho que este derecho es ante todo un derecho subjetivo, es decir, que corresponde a las personas interesadas en una decisión administrativa, exigir que la adopción de la misma se someta a un proceso dentro del cual se asegure la vigencia de los derechos constitucionales de contradicción, impugnación y publicidad. En este sentido, el debido proceso se ejerce durante la actuación administrativa que lleva a la adopción final de una

decisión, y también durante la fase posterior de comunicación e impugnación de la misma.

El debido proceso, se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente establecida en la ley, como también las funciones que les corresponden cumplir y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión. En esta medida, las autoridades administrativas únicamente pueden actuar dentro de los límites señalados por el ordenamiento jurídico.

El **derecho a la defensa** es entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados con los que cuentan las personas inmersas en un proceso judicial o administrativo, para preservar sus intereses y, en este sentido, puedan ser oídas, hagan valer sus razones y argumentos, controvertan, contradigan y objeten las pruebas en contra, soliciten la práctica de otras y ejerzan los recursos a que hayan lugar.

La Constitución Política dispone la procedencia de la acción de tutela contra los actos y omisiones de las autoridades públicas, cualquiera sea la naturaleza de aquellos, siempre que se trate de proteger un derecho fundamental y carezca el afectado de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

DEL CASO CONCRETO

La acción constitucional presentada es con el fin de que se ordene, se ordene al centro de conciliación dar cumplimiento al procedimiento consagrado en el art.550 del CGP y se ordene rehacer la petición en debida forma. Se ordene la pérdida de competencia del centro de Conciliación La Equidad y se ordene que remita el proceso para control de legalidad ante el Juez Civil del Circuito de Bogotá, para que se pronuncie sobre la competencia territorial, para que se resuelva la petición de recusación, se resuelva la petición de nulidad del trámite de insolvencia ante la Equidad Jurídica.

De los hechos narrados en el escrito de tutela, lo pretendido por el accionante y las respuestas allegadas por las entidades accionadas, la presente acción de tutela no está llamada a prosperar, toda vez que como bien lo indico el A-quo no se cumplió con el requisito previo de subsidiariedad, ya que el proceso adelantado esta sujeto a las etapas ordenadas en la norma que rige la materia, pues de lo narrado se desprende que no ha finalizado la graduación de créditos como tampoco Tutela No. 2021-00914 segunda instancia

se han resuelto las objeciones, por tanto el accionante debe estarse a las resueltas del proceso .

La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación "con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure 'vía de hecho'", y bajo los supuestos de que el afectado concorra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que "no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo"

No es dable acceder al amparo impetrado en este caso, con respecto al debido proceso, por cuanto el accionante no agoto todos los medios que a su alcance estaban ya que El agotamiento de los medios de defensa disponibles como requisito previo, responde por ende, al *principio de subsidiariedad* de la tutela, que impide que el juez constitucional entre a reemplazar a la autoridad competente para resolver aquello que la ley le autoriza, especialmente si los mecanismos para solucionar las posibles deficiencias en los procesos no han sido utilizados por las partes de acuerdo a las competencias que les asigna la ley.

La acción de tutela no puede ser considerada como una instancia más en el trámite , ni como un camino excepcional para remediar yerros u omisiones de las partes o para corregir etapas vencidas en los procesos. La tutela es una acción a la que se debe acudir exclusivamente en situaciones en las que efectivamente una determinación judicial o administrativa implique una vulneración o amenaza de derechos fundamentales de las personas, y no en los casos en que se pretendan solventar oportunidades procesales perdidas o discutir argumentos que nunca fueron objeto del debate en su sede natural.

Por ende, no se agotó, el requisito de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, lo que implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el carácter subsidiario de la acción, la Corte ha señalado que "*permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos*". Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos.

En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

Así las cosas, el amparo impetrado no tiene prosperidad y por consiguiente el fallo que en vía de impugnación se ha estudiado debe confirmarse ya que no amerita revocatoria ni nulidad alguna.

Por estas razones ha de confirmarse el fallo de primera instancia, el cual, se ajusta a normas legales y constitucionales.

Por lo expuesto, el Juzgado veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE :

1.- CONFIRMAR El fallo de tutela proferido por el Juzgado 86 Civil Municipal de esta ciudad convertido transitoriamente en 68 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, de fecha 14 de septiembre de 2021.

2º.- Notifíqueseles a las partes el presente fallo por el medio más expedito.

3 . Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

Firmado Por:

Maria Eugenia Fajardo Casallas

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 027 Escritural

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b8a5d368a544310a0dc0a3e82d39da9abaae2c703e9c48f8f8019e05087073c0**

Documento generado en 07/10/2021 07:34:55 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>